

La SEPI entra en barrena judicial con tres presidentes imputados y rescates bajo sospecha

Gualda se suma a Fernández y Lora en una cadena de causas que afecta a ayudas públicas por más de 760 millones

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El mayor conglomerado societario del Estado afronta una tormenta judicial inédita desde que en 1995 sustituyó al viejo INI franquista. Los tres presidentes, bajo mandato de Pedro Sánchez en el Gobierno, al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) están imputados en estos momentos. Junto a ellos, una veintena de altos cargos completan una telaraña penal tejida por los hilos de varias causas en investigación que compromete ayudas públicas por más de 760 millones de euros, amén de otros escándalos y presuntos pelotazos económicos.

Cinco macrosumarios (SEPI-Cloacas, Plus Ultra-Zapatero, Air Europa, Koldo y Begoña Gómez), cuatro tribunales diferentes y una sospecha de corrupción sistémica cercan por todos los flancos a esta otra 'joya de la corona' del Estado. La lupa de los jueces sobre los rescates de la pandemia ha dinamitado los cimientos de una pieza clave de la Administración, un 'holding' estatal garante de la soberanía industrial de España, que mueve más de 7.000 millones anuales y sostiene a cerca de 87.000 empleados. Pero el fango que mancha lo que venía haciendo 'marca España' va mucho más allá de los fondos de emergencia. El nombre de la SEPI aparece salpicado por escándalos más pedestres como los enchufes de las exnovias y amigas de José Luis Ábalos; las colocaciones de perfiles bajo sospecha como el de la 'fontanera de Ferraz', Leire Díez, en Correos; o los acomodos millonarios de piezas clave del partido, como el exge-

rente del PSOE Mariano Moreno al frente de Enusa, la firma pública vinculada a la energía nuclear.

Bajo la tutela directa del Ministerio de Hacienda, el gigante gestiona el patrimonio estratégico del Estado en corporaciones de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia, Correos, Tragsa o la

propia Enusa. Pero su exposición al abismo judicial estalló al convertirse en la ventanilla única del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Aquel mecanismo, dotado con 10.000 millones de dinero público para salvar firmas asfixiadas por el coronavirus, cerró con 30 operaciones au-

torizadas por el Ejecutivo de Sánchez que movilizaron 3.255 millones.

La onda expansiva reventó las costuras del 'holding' el pasado lunes. Ese día el magistrado Santiago Pedraz imputó a la actual presidenta, Belén Gualda, y amplió el encausamiento a otra veintena de al-

tos cargos y empleados. La base de la imputación fueron las duras acusaciones de Anticorrupción, que ve indicios de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, organización criminal y uso de información privilegiada. El mapa fiscal sitúa en el centro al clan Hirurok -Vicente Fernández, Leire



ILUSTRACIÓN ÁLEX SÁNCHEZ

Las salpicaduras de Zapatero, los enchufes, Venezuela y Aldama contra Begoña Gómez

M. SÁIZ-PARDO

El estallido de la causa que concierne a José Luis Rodríguez Zapatero ha contribuido, todavía más, a manchar más la imagen de la SEPI con el cuestionado rescate de Plus Ultra por 53 millones en marzo de 2021 bajo el sello de empresa «estratégica». El informe confidencial

de Aviación Civil incautado en el 'caso ZP' destroza la versión oficial: era una compañía minúscula, con pérdidas crónicas desde 2015, cuota residual en Barajas y dependiente de respiración asistida financiera. Ahora, el expresidente del Gobierno está acusado de haber metido mano en la sociedad pública para llevarse a su bolsillo parte de ese

salvamento público.

En otra esquina del mapa, asoma Duro Felguera tras embolsarse 120 millones en dos fases. La ingeniería asturiana arrastra un juicio por presuntos sobornos vinculados a una planta termoeléctrica en Venezuela, con su excúpula en el banquillo. El sumario de las 'cloacas' destapa ahí las maniobras de Leire Díez para

acelerar la nacionalidad española de Nervis Villalobos, uno de los cerebros del ecosistema financiero chavista.

El rastro de los contratos menores infecta al resto de filiales. En Mercasa, Anticorrupción investiga adjudicaciones a dedo a Servinabar para justificar una mudanza de sede con valoraciones infladas. En Enusa, se indaga una trama de activos de residuos en Melilla y Castellón junto a Acciona con retornos a Mediaciones Martínez. En Asturias, el foco está en un contrato de 2,85 millones para dismantelar baterías de

coque en Avilés, con desvíos de 575.857 euros al grupo Erri Berri. Y en Forestalia, la Fiscalía sigue la pista de 17,32 millones públicos en Arapellet y un pase societario que transmutó 141.404 euros en más de 6,8 millones.

Sueldo de 245.000 euros

Al final, las empresas de la SEPI operaron como la agencia de colocación del entorno socialista. Leire Díez saltó de Enusa a Correos como directora de Relaciones Institucionales, coincidiendo con Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro